

Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se declara:

Que es de reformarse y se reforma la sentencia del Juez de Distrito, en los términos siguientes:

"L. Justicia de la Union ampara y protege al Sr. D. José Ros y Prats, contra los procedimientos de la jefatura de hacienda de Morclos, posteriores al embargo."

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—Simón Guzmán.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico.—México, Enero 18 de 1875.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por José Alejandro García, contra los procedimientos del Lic. Catalá, que, en calidad de Juez sustituto de primera instancia de Minatitlán, lo ha juzgado y sentenciado á diez años de presidio con retención, por el delito de homicidio.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que D. José Alejandro García, vecino de Minatitlán, soli-

cita amparo y proteccion de la justicia federal contra el procedimiento criminal que le ha formado el ciudadano juez de primera instancia de aquel Canton, por el delito de asesinato de la jóven María Francisca Carreon, fundándose en que dicho funcionario desempeña el juzgado como sustituto, por ser juez primero de Paz de aquella villa, cuya eleccion popular fué nula por no haber tenido el año de vecindad que exige la ley electoral en su art. 78, y por lo tanto no lo considera competente para conocer de su causa.

Pedido el informe correspondiente á la respectiva autoridad ejecutora del acto reclamado, manifiesta, aunque sin fundamento, que no procede este juicio, por versarse la reclamacion sobre asunto judicial, conforme á lo dispuesto en el art. 8º de la ley orgánica y de procedimientos, siendo así que su artículo primero que es copia fiel del 101 de la Constitución federal, está en abierta oposicion con aquel, y por lo mismo es práctica constante de los tribunales federales, admitir el recurso contra todo acto judicial, y alega tambien que conforme á la Constitución del Estado, que es superior á la ley electoral, tiene los requisitos necesarios para la validez de su eleccion; sobre lo cual debe observarse, que la expresada Constitución cuando trata de los requisitos que deben reunir los votados para cualquier cargo público de eleccion popular, dispone que se esté á lo prevenido en la ley electoral.

El suscrito promotor con vista de lo actuado y con presencia de lo determinado expresamente en el art. 99 de dicha ley, considera de la exclusiva facultad de la H. Legislatura del Estado, hacer la declaracion de la nulidad de las elecciones de los funcionarios públicos, entre los que se encuentra el juez primero de Paz de Minatitlán, que está desempeñando el juzgado de primera instancia, cuya atribucion legislativa no tiene término fijado para su ejercicio; así es que todas las autoridades, funcionarios y empleados de la República, tienen el deber de

considerar como tal juez, y como autoridad legítima, al primero de paz y juez de primera instancia de Minatitlán, de que ha hecho referencia, entre tanto no haya quien se queje ante la legislatura sobre el vicio de falta de vecindad que se indica, y ésta no declare la repetida nulidad.

No habiéndose hecho esa declaración de nulidad, sería muy aventurado que los tribunales federales se fundaran en el vicio que se alega de falta de vecindad en el municipio, para conceder el amparo que se solicita, porque la citada ley en su art. 94 dispone, que se anule la elección por la autoridad correspondiente en el caso de reclamación por falta de algunos de los requisitos que ella establece, pero no que dicha elección se considere *ipso jure* nula, con el hecho de resultar demostrado el vicio; así es que no basta que ahora se alegue ante la justicia federal, ni esta tiene facultad para apoyarse en ese fundamento, que aun no ha sido calificado por la autoridad del Estado competente, porque de hacerlo, juzgaría de un acto no sujeto á su jurisdicción, y por lo mismo restringiría la soberanía del Estado en lo concerniente á su régimen interior, de que tratan los arts. 40 y 41 de la Constitución federal.

Si el amparo se pidiera contra el procedimiento por violarse en él algunas de las garantías individuales, pero sin fundarse en la ilegitimidad del nombramiento del juez que lo sigue, porque ese motivo argüiría nulidad y no incompetencia propiamente tal, sería procedente la solicitud, y la justicia federal examinaría con legítima jurisdicción, si el juez era competente ó no para conocer de la causa que motiva la queja, ó si ha violado, en caso de serlo, alguna otra de las garantías; pero tratándose de conseguir el amparo por la nulidad del nombramiento del juez, esa calificación debe hacerse mediante el respectivo recurso, en todo tiempo, por la legislatura, como previene el citado art. 99 de la ley electoral; y esa atribución que corresponde exclusivamente á la sove-

ranía del Estado, debe ser acatada, en concepto del infrascrito, por la autoridad federal.

El quejoso, por otra parte, parece que consintió en la elección que ahora califica de nula, pues en su oportunidad no hizo la denuncia á la junta de escrutinio, y ahora mismo no ocurre á la misma H. legislatura como puede hacerlo, porque en todo tiempo puede ejercitar ese derecho, de lo que se deduce, que con el designio de conseguir una demoia para el curso de la causa, ha promovido este juicio de amparo.

Los de esta clase proceden contra leyes ó actos de cualquiera autoridad ó funcionario público y no de particulares; y si no se considera como autoridad legítima por el quejoso al ciudadano juez que lo está juzgando no debe pedir amparo sino argüir la nulidad de su nombramiento ante quien deba conocer de ese recurso, que por cierto no corresponde al juez federal.

Para demostrar los conceptos que anteceden, dispone el art. 121 de la propia ley electoral, «que sin la previa declaración de nulidad en la elección por algunas de las causas determinadas en el art. 94 de la misma, ninguna autoridad ni funcionario podrá impedir que tome posesión el ciudadano declarado electo para algún encargo y que los infractores de esta prevención quedan sujetos á las penas que se designan para los abusos de autoridad.»

Además, si fuese lícito á la autoridad federal hacer la calificación de que ahora se trata, para fundar el amparo solicitado, lo mismo podría hacerse tratándose de los nombramientos de los altos funcionarios de la nación y del Estado, lo que produciría consecuencias muy perjudiciales y trascendentales á la sociedad, pues se dudaría de la legalidad de todos sus actos, y se reproducirían los juicios de amparo, causando un verdadero trastorno en los negocios de la administración pública.

Por estos fundamentos, el suscrito promotor fiscal contempla improcedente el am-

paro que pretende el quejoso por la causa de nulidad que alega, y no porque se verse un asunto judicial, como opina el ciudadano juez informante, y por tanto pide á vd. que se sirva denegarlo, sin imposición de multa, por no haber temeridad en el recurso.

H. Veracruz, 16 de Octubre de 1874.—*Lic. J. M. López de Escalera.*

Es copia que certifico. H. Veracruz, Noviembre 6 de 1874.—*Lic. Luis Y. Gómez.*
—A.—*José M. Gonzalez.*—A.—*Vicente Simancas.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

H. Veracruz, Noviembre 3 de 1874.

Visto este juicio de amparo promovido por José Alejandro García contra el ciudadano juez sustituto de primera instancia de Minatitlan, con motivo de la pena de diez años de prision con retención á que dicho juez le condenó por la muerte de la joven Francisca Carreon, alegando para fundar su petición, que fué juzgado y sentenciado por autoridad incompetente; visto el informe que emitió la autoridad referida; lo pedido por el ministerio fiscal, lo alegado por el defensor del quejoso, la citación para sentencia y cuanto mas consta de autos:

Considerando: que José Alejandro García ha interpuesto el recurso de amparo después de haber consentido en que procediera contra él el juez sustituto de primera instancia de Minatitlan, cuya nulidad de elección no arguyó oportunamente ante autoridad que fuera competente para declararla; que al elevar la causa para revisión al H. Tribunal Superior de Justicia, tampoco consta que hubiera hecho protesta alguna contra los procedimientos del inferior en razón de nulidad, para que se tomase en consideración al practicar dicha revisión; que la conformidad del quejoso en ambos procedimientos, importa el reconocimiento de la jurisdicción de ambos tribunales.

Considerando: que aun cuando se admira la ilegitimidad de la elección del Lic.

Pedro J. Catalá, para juez de paz del cantón de Minatitlan, y que por esta razón no pudiera desempeñar como sustituto el juzgado de primera instancia, esta incompetencia que, por la nulidad de la elección alega el quejoso, ha dejado de existir desde el momento en que por su propia voluntad reconoció la jurisdicción de aquella autoridad; que además, la revisión que el tribunal Superior de Justicia ha hecho del inferior, aprobándolo, significa la conformación de todos los procedimientos de este y, en consecuencia, la implícita declaración de validez de sus actos:

Considerando: que contra tal declaración nada puede objetarse, puesto que ha sido hecha por autoridad competente, como lo es el mencionado Tribunal Superior para la aprobación ó revocación de los fallos de los jueces inferiores; que en consecuencia, no se ha violado garantía alguna en la persona del quejoso; con cuanto mas ver y considerar convino, y de conformidad con los arts. 101 y 102 de la Constitución general de la República y relativas de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, este juzgado, en definitiva falla:

1º: La Justicia de la federación no ampara ni protege al quejoso José Alejandro García contra la sentencia que el juzgado de primera instancia de Minatitlan dictó contra él, condenándole á diez años de prision con retención, y cuya sentencia ha sido confirmada por la superioridad.

2º: Notifíquese, sáquense las copias correspondientes para su publicación, y envíense originales estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revisión. Así lo mandó y firmó el ciudadano juez de Distrito del Estado: lo testificaron:—*Lic. Luis I. Gómez.*—A.—*José M. Gonzalez.*—A.—*Vicente Simancas.*

Es copia que certifico, H. Veracruz, Noviembre 6 de 1874.—*Lic. Luis I. Gómez.*
—A.—*José M. Gonzalez.*—A.—*Vicente Simancas.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Diciembre 21 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por José Alejandro García, contra los procedimientos del Lic. Catalá, que, en calidad de juez sustituto de primera instancia de Minatitlán, lo ha juzgado y sentenciado á diez años de presidio con retencion, por el delito de homicidio, sin embargo de no ser autoridad competente para ello, á causa de la nulidad de su eleccion para el expresado cargo, por no tener un año de residencia en Minatitlán en la época en que fué nombrado, por cuyo motivo juzga el quejoso que con tales procedimientos se ha vulnerado, en perjuicio suyo, la garantía que consigna el art. 16 de la Constitución federal.

Considerando: que no se ha justificado en estas actuaciones, que el vicio que se asegura existir en la eleccion del Lic. Catalá para juez de primera instancia importa, conforme á las leyes del Estado, la nulidad de la eleccion y de todos los actos de la persona en que hubieren recaído; y que esta nulidad se verifique en fuerza de la ley y sin necesidad de una declaracion especial dictada por autoridad competente.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta:

Que es de confirmarse, y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Veracruz en 3 de Noviembre del presente año, en la que declaró: que la justicia de la union no ampara ni protege al quejoso José Alejandro García, contra la sentencia que el juzgado de primera instancia de Minatitlán dictó contra él condenándolo á diez años de presidio con retencion, y cuya sentencia ha sido confirmada por la superioridad.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para

los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.*—*José Arceaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Ndjera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 18 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. Elorza y Mendía del comercio de Mazatlán, contra el administrador de la aduana de ese puerto, que se niega á recibirlos en moneda de cobre el pago de ciertos derechos.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez 2º suplente de Distrito.

El que suscribe llevando la voz fiscal por ausencia del promotor, emite el siguiente parecer.

Los Sres. Elorza y Mendía, intentando pagar con la antigua moneda que en cuartillas de cobre circulaba en el Estado, se resisten á pagar la cantidad de \$ 157 50 cs. con el recargo de \$ 19 44 cs. que ejecutivamente les ha cobrado la Aduana terrestre de este puerto, por el tercer tercio de contribuciones ordinarias de este año que di-